



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Departamento de Derecho Privado

Área de Derecho Civil

Curso 2014/2015

**LA CULPA DE LA VÍCTIMA EN EL
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
ESPAÑOL**

Javier Díez Corredera

Dirigido por: Pfra. Dra. D^a. Nieves Martínez Rodríguez

Junio de 2015

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Departamento de Derecho Privado

Área de Derecho Civil

**LA CULPA DE LA VÍCTIMA EN EL
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
ESPAÑOL**

**BLAME OF THE VICTIM IN
SPANISH TORT LIABILITY SYSTEM**

Javier Díez Corredera
jdco@usal.es

Tutora: Pfra. Dra. D^a Nieves Martínez Rodríguez

RESUMEN

“La culpa de la víctima en el sistema de responsabilidad civil extracontractual español” pretende realizar una aproximación clarificadora y ejemplificativa de una de las causas de exoneración de responsabilidad más alegadas en sede judicial, a través de posicionamientos jurisprudenciales.

Para lograr su objetivo, se contempla la reglamentación del régimen general de la culpa de la víctima, tanto en su vertiente exoneradora como en su vertiente moderadora de responsabilidad, enumerando y exponiendo los requisitos necesarios.

Asimismo centra la atención en cuatro de los regímenes especiales que contienen la culpa de la víctima como causa de limitación o anulación de responsabilidad:

- Circulación de vehículos a motor
- Productos y servicios defectuosos
- Daños causados por animales
- Daños producidos por una Administración Pública

PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD CIVIL, DERECHO DE DAÑOS, CULPA DE LA VÍCTIMA, REGIMEN GENERAL, REGÍMENES ESPECIALES

ABSTRACT

Through jurisprudential positions “Blame of the victim in spanish tort liability system” seeks to make an enlightening approximation of one of the most alleged causes of exemption in court.

To achieve its goal, the regulation of the general system of the blame of the victim is seen, both in its releasing aspect and in moderating aspect of responsibility, listing and exposing requirements.

It also focuses on four of the special arrangements that contain the negligence of the victim as a cause of limitation or revocation of responsibility:

- Circulation of motor vehicles
- Defective products and services
- Damages caused by animals
- Damages caused by a public administration

KEYWORDS: CIVIL LIABILITY, TORT LAW, BLAME OF VICTIM, GENERAL SYSTEM, SPECIAL ARRANGEMENTS.

Alterum non laedere, honeste vivere, suum cuique tribuere

LA CULPA DE LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ESPAÑOL

ÍNDICE

I. Introducción	1
II. Referencia a la responsabilidad subjetiva y objetiva	2
La responsabilidad subjetiva	3
La responsabilidad objetiva.....	3
III. Régimen general de la culpa de la víctima.....	6
a. Aclaración terminológica	6
b. Referencia histórica a la obligación de la víctima de mitigar el daño y su presencia en derecho comparado	8
c. La culpa de la víctima como causa de exoneración de responsabilidad.....	10
i. Requisitos.....	11
ii. Participación causal de los inimputables.....	13
d. La culpa de la víctima como causa de moderación de la responsabilidad	14
IV. Regímenes especiales.....	19
a. Circulación de vehículos a motor.....	19
i. Culpa de la víctima como causa de exoneración de responsabilidad.....	20
ii. Culpa de la víctima como causa de moderación de la responsabilidad.....	21
iii. Criterios en las tablas de la LRCSCVM	23
b. Daños causados por productos y servicios defectuosos	25
c. Responsabilidad Civil por daños causados por animales	28
d. Responsabilidad de las Administraciones Públicas.....	31
V. Conclusiones.	35
VI. Bibliografía	36
VII. Anexo de jurisprudencia: Sentencias de la Sala I del Tribunal Supremo	38

Abreviaturas utilizadas:

Art.:	Artículo. Artículos, en plural: arts.
BGB:	Bürgerliches Gesetzbuch, Código Civil Alemán en vigor desde el 1 de enero de 1900.
Cap:	Capítulo
Cc Argentino:	Código Civil de la República de Argentina aprobado el 25 de Septiembre de 1869.
Cc Portugués:	Código Civil de la República Portuguesa aprobado el 25 de Noviembre de 1966.
Cc:	Código Civil español, aprobado por Real Decreto de 24 de Julio de 1889.
CP	Código Penal español, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre.
Ed.:	Edición
LRCSCVM:	Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.
Núm.:	Número
Op. Cit:	Obra del mismo autor citada con anterioridad
PETL:	Principles of European Tort Law. Principios europeos del Derecho de Daños.
Ss:	Páginas siguientes
SSTS:	Sentencias del Tribunal Supremo
STS:	Sentencia del Tribunal Supremo
TRLGDCU:	Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
TS:	Tribunal Supremo
<i>Vid:</i>	Véase
VS:	<i>Versus</i> , contra

I. Introducción

A través del presente Trabajo de Fin de Grado “La culpa de la víctima en el sistema de responsabilidad civil extracontractual español” nos adentramos en uno de los aspectos del Derecho de Daños que sería posible considerar como contrapunto a la profusamente extendida convicción de que, producido un daño, el demandado debe responder por él en virtud de la responsabilidad extracontractual: la participación causal de la víctima.

El objeto no es otro que realizar una aproximación clarificadora a los supuestos que, tanto en el régimen general como en los regímenes específicos escogidos, aminoran, limitan o impiden la responsabilidad del agente del daño.

Durante el desarrollo del Trabajo se pretenden interpretar e ilustrar los diferentes estadios, determinados por la mayor o menor participación de la víctima en el hecho del que ha resultado dañada, de cara a su influencia en la responsabilidad y por tanto en la indemnización a satisfacer por quien ha causado el menoscabo de bienes o derechos.

Por medio de una aproximación a las consecuencias de los sistemas de responsabilidad subjetivo y objetivo, tras una breve referencia histórica de los antecedentes de este fenómeno, se desarrollará el régimen general de la culpa de la víctima en su facultad de causa exoneradora de responsabilidad del inicialmente considerado causante del daño así como en su modalidad moderadora.

Los regímenes especiales tratados, circulación de vehículos a motor, productos y servicios defectuosos, daños causados por animales y responsabilidad por daños causados por Administraciones Públicas, han sido seleccionados por la cuantía de víctimas que implican, por el coste (en todos los sentidos que suponen) y por la repercusión y trascendencia que socialmente han mantenido a lo largo del tiempo.

Para ello buscamos el apoyo de la regulación vigente en textos legales (Código Civil y leyes especiales), y de las posturas doctrinales más recientes, para confrontarlas con los posicionamientos jurisprudenciales de la Sala I del Tribunal Supremo, con una finalidad fundamentalmente descriptiva y, asimismo, ejemplificativa.

II. Referencia a la responsabilidad subjetiva y objetiva

Cuando se causa un daño o cuando tiene lugar, la persona que lo sufre o lo reclama necesita fundamentar su pretensión en algo. Tradicionalmente, como principio que fundamentaba el derecho del perjudicado a ser indemnizado por los daños que se le habían causado, la culpa era suficiente para sostener esa reclamación. Así lo contempla el artículo 1902 Cc: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”.

Siguiendo el planteamiento de Roca Trías¹, la existencia de una cláusula de este tipo permite que sea posible una adaptación a las necesidades sociales y, seguramente, debido a ella los requisitos exigidos en esta cláusula no se han interpretado de la misma forma en la jurisprudencia de las diferentes épocas desde la entrada en vigor del Código Civil en 1889, advirtiendo varios periodos, un tránsito hacia formas cada vez más objetivizadas y, finalmente, la vuelta a la solución inicial: hubo un periodo en el que, debido a la inversión del silogismo en la práctica judicial, la imputación por culpa constituía un criterio con un papel residual por la reconducción al riesgo como criterio de imputación, llegando a convertirse en un régimen de responsabilidad objetiva o cuasi objetiva, puesto que se mantenían causas de exoneración de la responsabilidad.

La última tendencia del Tribunal Supremo nos lleva de nuevo, como podremos advertir más adelante, a la culpa como criterio de imputación, con una corrección moderada del mismo y un alejamiento de fórmulas objetivas. A salvo quedan, como es lógico, los supuestos en que una ley de carácter especial establezca expresamente un régimen de responsabilidad de tipo objetivo.

En este iter y presente en los distintos periodos hallamos la culpa de la víctima como causa de exoneración de responsabilidad, el objeto de estudio en el presente trabajo.

¹ ROCA TRÍAS, E. *Derecho de Daños. Textos y materiales*. Tirant lo Blanch, Valencia 2011, pág 24.

La responsabilidad subjetiva

El régimen de responsabilidad civil imperante en los ordenamientos jurídicos hasta finales del siglo XIX basaba la responsabilidad en la culpa del agente y exigía como requisito *sine qua non* una conducta negligente o culposa. La culpa es, entonces, un elemento subjetivo de reproche de la conducta cuyo objetivo es prevenir comportamientos dañosos por medio de la reparación o indemnización.

Para los defensores de la culpa, es necesario que se dé un acto humano, voluntario, doloso o culposo, para que surja la obligación de reparar. La mera causación del daño por el supuesto responsable no es suficiente por carecer precisamente de lo que los subjetivistas consideran como “fundamento” de la responsabilidad.²

Las reglas de los sistemas de responsabilidad subjetiva o culpabilística se basaban, primero, en que la responsabilidad no era posible sin culpa o dolo del agente; segundo, en que el concepto de culpa identifica fundamentalmente un elemento subjetivo del agente, caracterizado por la negligencia, la imprudencia o la impericia; y tercero, en que las reglas de responsabilidad civil que disciplinan el acto culposo asumían de alguna manera esa función de sanción de la culpa e incluso de amenaza dirigida a prevenir.³

La responsabilidad objetiva

Tal como expone la STS de 2 de marzo de 2000, el artículo 1902 Cc, “establece y regula la obligación surgida de un acto ilícito, y se puede estimar como uno de los preceptos emblemáticos del Código Civil, del cual surge la figura de la responsabilidad o culpa extracontractual, figura que, en fondo y forma está sufriendo una evolución progresiva no solo en el campo de la doctrina sino también en el de la jurisprudencia, y ello debido a dos datos remarcables, como son: a) un sistema de vida acelerado y de enorme interrelación, y b) la tendencia a maximizar en lo posible la cobertura de las consecuencias dañosas de la actividad humana. Todo lo cual lleva inexorablemente a objetivizar la responsabilidad, perdiendo importancia en el campo sustantivo la teoría

² ACEVEDO PRADA, R. D. “Una mirada a la responsabilidad civil española: el régimen subjetivo” *Revista Guillermo de Ockham* 11, 2013. pág 79-88.

³ REGLERO CAMPOS, F. “Culpa y riesgo en los modernos sistemas de responsabilidad” en *Congreso Internacional de Responsabilidad Civil*. Medellín, Colombia 2005.

culpabilista, (...) lo que lleva inexcusablemente a una enorme ampliación de la obligación "in vigilando" y a un "plus" en la diligencia normalmente exigible. Desde luego es incuestionable que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en concreto la de esta Sala y sobre todo la más actual, tiende hacia el establecimiento emblemático de la responsabilidad objetiva, en aquella derivada de los eventos concretados en el art. 1.902 del Código Civil, pero nunca lo ha realizado hasta establecer dicha responsabilidad objetiva de una manera absoluta y radical”.

Se evidencia por tanto, que nunca ha existido un dilema propiamente dicho sobre responsabilidad civil por culpa o por riesgo: en realidad la defensa de los sistemas de responsabilidad objetiva en alguno o algunos de los ámbitos de la actividad socio-económica nunca han supuesto que se preconizara el abandono total o absoluto del principio de la culpa sino que se fue introduciendo la responsabilidad objetiva o por riesgo en los distintos ámbitos socio-económicos. Así, por ejemplo, el propio Código Civil de 1889 contiene normas que consagran una responsabilidad civil objetiva como son los arts 1905 y 1910.⁴

Podemos acudir a otra Sentencia del TS, la de 16 de diciembre de 1988, cronológicamente anterior a la vista en el párrafo precedente para, en el mismo sentido, concluir que “la doctrina de esta Sala (Primera) no ha objetivado en su exégesis del art. 1.902 del Código Civil su criterio subjetivista y sí, únicamente, para su más adecuada aplicación a las circunstancias y exigencias del actual momento histórico, ha procurado corregir el excesivo subjetivismo con que venía siendo aplicado” y sigue diciendo “por otra parte, dicha corrección, bien se opere a través de la aplicación del principio del riesgo, bien de su equivalente -de inversión de la carga de la prueba-, nunca elimina en dicha interpretación los aspectos no radical sino relativamente subjetivistas con que fue redactado (dicho art. 1.902 del Código Civil)”

Sin embargo la expresión de esta jurisprudencia no implica que la responsabilidad vaya a surgir en todas las ocasiones puesto que, como contemplan una innumerable cantidad de sentencias, hay que tener en cuenta la intervención de la persona que ha resultado dañada o perjudicada por el daño. Esta relación de causalidad entre la conducta del

⁴ REGLERO CAMPOS, F. “Culpa y *riesgo* en los modernos sistemas de responsabilidad” op. cit.

agente y el daño producido puede verse interferida por la conducta del propio dañado o por hechos ajenos a éste que pueden dar lugar a una exoneración de la responsabilidad de aquél o a una minoración de la misma.⁵

En este sentido y en relación con la conducta del perjudicado, dice la sentencia del TS de 23 de enero de 1970 que “casos como este, en que existe concurrencia compensatoria, conducen a distinguir tres soluciones diferentes atendiendo a las posibles entidades de las respectivas culpas intervinientes: en primer lugar, absorción de la culpa de la víctima por la del agente, dada la magnitud de ésta (como se puede observar en las SS de 10 de julio de 1943 y 15 de junio 1967, entre otras); en segundo término, lo contrario, o sea, absorción de la culpa del agente por la de la víctima, en atención a la importancia de ésta; y finalmente –como se hizo entre otras en la sentencias de 10 de mayo de 1963 y 15 de noviembre de 1967- por considerar que ambas son similares o equivalentes, moderación o reducción de la indemnización señalada.”

La cuestión de la culpa de la víctima es una de las claves que permiten el correcto funcionamiento de cualquier subsistema de responsabilidad civil, ya sea responsabilidad por riesgo o por culpa, pues, tal como señala el profesor Cavanillas Múgica, “la culpa de la víctima constituye una causa de exclusión de la responsabilidad civil que es común a la responsabilidad por riesgo y a la responsabilidad por culpa.”⁶

De ahí que deduzcamos que es necesario conciliar el objetivo último de la Responsabilidad Civil (devolver a la persona que sufre o se ve perjudicada por el daño a la situación anterior a que ocurriera) con las consecuencias exoneradoras o moderadoras que se deben anudar a su actuación causal, puesto que solo de esa forma se alcanzará una distribución del daño racional. Y esto porque, siguiendo al profesor León González, “la culpa de la víctima se ha convertido en nuestro Derecho, al igual que en la mayoría de los ordenamientos, en uno de los instrumentos de técnica jurídica más profusamente

⁵ GÓNZALEZ POVEDA, P. “La responsabilidad del fabricante frente a terceros” en *Tratado de Responsabilidad Civil*, coordinado por SIERRA GIL DE LA CUESTA, I. Pág. 734.

⁶ CAVANILLAS MÚGICA, S. “Comentario a la STS de 20 de enero de 1992”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 28. Marzo de 1992. Pág 229

utilizados con el fin de contrarrestar o, por lo menos, equilibrar los excesos que ha traído consigo a lo largo del último siglo la expansión de la Responsabilidad Civil”.⁷

Partiendo de la dinámica que hemos detallado sobre la responsabilidad subjetiva y la objetiva, nos ocupamos a continuación de la culpa de la víctima como criterio que exonera o que reduce la responsabilidad, en su régimen general primero y en cuatro de los particulares después.

III. Régimen general de la culpa de la víctima

a. Aclaración terminológica

La culpa de la víctima, como causa de exoneración, alude a los supuestos en los que la conducta de la víctima del daño reuniría todas las condiciones para ser considerada generadora de responsabilidad de no ser porque su autor es el propio perjudicado por la misma. La doctrina dominante, tanto española como extranjera, acude a la expresión «culpa de la víctima» para referirse a la intervención causal de la víctima en la producción del daño con virtualidad total o parcialmente exoneradora para el agente dañoso.⁸

Son hipótesis en las que la conducta del perjudicado interfiere en el curso normal de los acontecimientos, dando lugar a soluciones distintas de las que habrían sido procedentes de no haber sido así.⁹

Llama la atención el empleo de expresiones tales como *culpa de la víctima*, *víctima del daño*, *perjudicado*, etc., si bien, no son coincidentes ni equivalentes, como tratamos de aclarar a continuación.

Por ejemplo, la LRCSCVM o el TRLGDCU –que comentaremos en la parte de regímenes especiales- hablan de *culpa del perjudicado* como causa de exoneración de responsabilidad del causante del daño, y sin embargo en textos legales rara vez se

⁷ LEÓN GONZÁLEZ, J.M. “Significado y función de la culpa en el actual Derecho de Daños” en *La responsabilidad civil. De Roma al Derecho Moderno, coordinado por MURILLO VILLAR*. Burgos 2001. Pág 23

⁸ MEDINA ALCOZ, M. *La culpa de la víctima en la producción del daño extracontractual*. Dykinson, Madrid, 2003. Pág 127

⁹ DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., “Elementos o presupuestos de la responsabilidad civil (III), en *Tratado de Responsabilidad Civil* Coordinado por SIERRA GIL DE LA CUESTA. Ed Bosch, 2008. Pág 449.

emplea el término «víctima» para referirse a quien sufre los daños como participante causal en el suceso dañoso.

El uso de los conceptos *víctima* y *perjudicado* de forma indistinta no implica que sean coincidentes, tal como sucede cuando como consecuencia del hecho dañoso se causan perjuicios no solo a quien lo sufrió directamente, sino a otras personas que lo padecieron de forma indirecta, por ejemplo: la víctima de un accidente de trabajo es el operario que queda incapacitado para continuar trabajando a causa de las lesiones, y perjudicados serían tanto él como los familiares a su cargo que se ven privados de su medio básico de subsistencia.

En ocasiones, la víctima puede no ser en sentido estricto, perjudicado: esto sucede cuando fallece de forma instantánea a consecuencia del accidente. Llamaremos, pues, «víctima» a quien sufre el daño corporal o patrimonial, mientras que «perjudicado» es una expresión que se suele reservar para quien experimenta daño indirectamente como consecuencia del sufrido por la víctima.

A los efectos de liberación del causante del daño, esta distinción tiene particular relevancia en los sistemas objetivos de responsabilidad. Con carácter general cabe decir que cuando la culpa es exclusiva de la víctima se produce una absoluta exoneración de responsabilidad del demandado tanto respecto de la propia víctima como de todos los perjudicados. Pero si la culpa es de alguno de éstos, nacerá la responsabilidad de aquél (salvo que pueda ser calificada de fuerza mayor), y el perjudicado culpable no tendrá derecho a ser indemnizado, aunque sí los demás.¹⁰

Quizá convenga insistir, no obstante, en que cuando la culpa del perjudicado es realmente única, la absolución del supuesto responsable –al menos en el régimen de atribución de responsabilidad común, que es el basado en la culpa- tendrá que venir justificada, precisamente, por la circunstancia –premisa en este caso- de que ese presunto responsable no ha incurrido en culpa alguna.¹¹

¹⁰ REGLERO CAMPOS “El nexo causal. Las causas de exoneración de responsabilidad: culpa de la víctima y fuerza mayor. La concurrencia de culpas” en *Lecciones de Responsabilidad Civil. 2ª ed.* Coordinado por BUSTO LAGO Y REGLERO CAMPOS. Thomson Reuters Aranzadi. 2013. Pág 127.

¹¹ DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., “Elementos o presupuestos de la responsabilidad civil (III), en *Tratado de Responsabilidad Civil* Coordinado por SIERRA GIL DE LA CUESTA. Ed Bosch, 2008. Pág. 456.

Así podemos observarlo en la STS de 24 de enero de 2003: –accidente al trepar por una torre de alta tensión, demanda a la empresa eléctrica- “hay que tener en cuenta que la situación de culpa exclusiva se produce no solamente cuando la culpa de la víctima es total o el único fundamento del resultado, sino también cuando dándose una circunstancia concurrente existe una gran desproporción o la actuación de la víctima es de tal gravedad que anula o absorbe aquella”.

b. Referencia histórica a la obligación de la víctima de mitigar el daño y su presencia en derecho comparado

Puede darse el caso en que el perjudicado por el daño agrave las consecuencias de la acción del causante. A continuación vamos a ver, en relación con el daño que haya podido sufrir una persona por la conducta desplegada por otra, la aparición de culpa de la víctima por no evitar o contribuir al aumento de aquél, su evolución y el tratamiento actual, a título de ejemplo, en algunos ordenamientos jurídicos más o menos próximos.

Ya en el Derecho Romano, que la víctima contribuyera a su propio mal suponía la ruptura del nexo causal, lo cual suponía la no responsabilidad del agresor.

En el Common Law este tipo de situaciones se engloban en lo conocido como *contributory negligence*, vía de defensa que utiliza el demandado cuando la víctima ha contribuido a su propio mal. El primer caso en el que se habla de *contributory negligence* es el de *Butterfield vs Forrester* (1809). Éste último estaba haciendo reparaciones en su casa y dejó un palo abandonado al otro lado de la calle. Butterfield cabalgaba a gran velocidad a las 8 de la tarde, que ya era una hora crepuscular, y no vio el poste, por lo que tuvo un accidente, se cayó del caballo y sufrió lesiones. Un testigo declaró que había una visibilidad de 100 yardas en el momento del accidente. En el caso se resolvió que si Butterfield hubiera cabalgado *with reasonable care* (con un cuidado razonable) podría haber evitado el accidente.

La doctrina más clásica a este respecto es la conocida como *clean hands*, según la cual nada puede pretender quien no se presenta con las manos limpias para demandar, sin haber contribuido al mal de ninguna manera.

Como superación de esta doctrina de *clean hands* se encuentra la idea *last clear chance* (última oportunidad clara), en la que habría que averiguar quién tuvo la última

oportunidad clara de evitar el daño, y ese será considerado causante, pues es quien habría podido evitarlo.

Más allá de lo anterior se propuso la *comparative negligence*, que buscaba realizar una distribución de culpas entre todos los causantes, de tal forma que cada uno responda de los daños que causa, y solo de ellos, pero de todos ellos.

En derecho comparado podemos ver, por ejemplo, que el art 1111 del Código Civil argentino dispone que “el hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna”. De esta forma, si el hecho que causa daño no es imputable únicamente a la víctima, existirá responsabilidad, pero en la parte en que no sea imputable a dicha víctima la causación del daño.

En el Código Civil portugués el artículo 570, titulado *culpa do lesado*, establece: “1. Cuando un hecho ilícito de la parte perjudicada hubiera contribuido a la producción o el agravamiento de los daños, le corresponde a la Corte determinar, en base a la gravedad de las faltas de ambas partes y las consecuencias que de éstas han resultado, si la indemnización debe ser plenamente concedida, reducida o excluida. 2. Si la responsabilidad se basa en una mera presunción de culpa, la culpa de la víctima, a falta de disposición en contrario, se excluye el deber de indemnizar.”

En el parágrafo 254 BGB se advierte de que si la víctima ha contribuido al daño, tanto la responsabilidad como la extensión de la indemnización dependerán de las circunstancias concretas y, en particular, de la cantidad de daño causado por cada uno.

Por su parte, el artículo 8:101 PETL señala sobre la *Conducta o actividad concurrente de la víctima*: “(1) Puede excluirse o reducirse la responsabilidad, en la medida en que se considere justo, en atención a la culpa concurrente de la víctima y a cualesquiera otras circunstancias que serían relevantes para establecer o reducir la responsabilidad de la víctima si ella fuera la causante del daño. (2) Si se solicita la indemnización con relación a la muerte de una persona, su conducta o actividad excluye o reduce la responsabilidad conforme a lo expuesto en el apartado 1. (3) La conducta o actividad concurrente de un auxiliar de la víctima excluye o reduce la indemnización que ésta puede reclamar conforme a lo dispuesto en el apartado 1.”¹²

¹² NAVARRO MENDIZÁBAL, I. “La relación de causalidad (II)” en *Derecho de Daños*. Coordinado por NAVARRO MENDIZÁBAL y VEIGA COPO, A. Civitas-Thomson Reuters. 2013. Pamplona, pág. 238.

Procede señalar, respecto a los PETL, que tal y como está sucediendo con otros aspectos del Derecho Privado, la responsabilidad civil extracontractual también está siendo objeto de análisis y de propuestas a nivel europeo, de momento en un plano doctrinal. Esto supone un encuentro de distintas tradiciones jurídicas y una actualización en el tratamiento de aspectos concretos del Derecho de daños. Estando el sistema español de responsabilidad extracontractual construido casi en exclusiva sobre una cláusula general (artículo 1902 del Código Civil), era un paso previsible que nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia emplearan una herramienta como los Principles of European Tort Law (PETL) para inspirarse y actualizar la toma de decisiones sobre el Derecho de daños.¹³ Como ejemplos de su aplicación por nuestro Tribunal Supremo, podemos mencionar la STS de 24 de Noviembre de 2008, o la STS de 8 de Junio de 2011, que se apoyan en ellos, al decir que “los Principios de Derecho Europeo de Responsabilidad Civil consideran daño patrimonial resarcible toda disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso y, al referirse a la indemnización del dicho daño corporal, establecen en el artículo 10:202 que dicho daño patrimonial incluye la pérdida de ingresos, el perjuicio de la capacidad de obtenerlos y gastos razonables, como el coste de la atención médica”.

c. La culpa de la víctima como causa de exoneración de responsabilidad

La culpa de la víctima es, con mucho, la excepción más frecuentemente alegada por los demandados y, sobre todo, la que está detrás de una buena parte de las sentencias absolutorias, bien considerada bajo esta categoría específica, bien bajo la forma de caso fortuito o fuerza mayor, o bien como ruptura del nexo causal. La concurrencia de la culpa de la víctima determina la exclusión tanto de la imputación objetiva como de la culpa del pretendido responsable. Esta circunstancia se recoge como causa de exoneración en la práctica totalidad de los textos legales que instituyen sistemas objetivos de responsabilidad.¹⁴

¹³ MARTÍN SALAMANCA, S. *Aplicación de los PETL al Ordenamiento Jurídico Español*. Presentación del Grupo de Investigación para la Proyección de los Principios de la Responsabilidad Civil en el Derecho de Daños de la Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por del Olmo García. Enlace URL a fecha 19 de abril de 2015: http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_dcho_privado/area_dcho_civil/investigacion/grupos_investigacion/aplicacion_petl

¹⁴ REGLERO CAMPOS, L. “El nexo causal. Las causas de exoneración de responsabilidad: culpa de la víctima y fuerza mayor. La concurrencia de culpas” en *Lecciones de Responsabilidad Civil*, 2ª Ed. Coordinado por BUSTO LAGO y REGLERO CAMPOS. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona Pág 126

i. Requisitos

En el régimen general, para liberar al agente del daño, la culpa exclusiva de la víctima debe reunir estas condiciones: en primer lugar, ha de ser la única y exclusiva causa originadora del daño, es decir, ser la única conducta que conforme la causa material y a la que, además, le sea le sea imputable objetivamente el daño de entre las posibles; en segundo lugar, la conducta de la persona a quien se reclama ha de ser absolutamente irreprochable; en tercer lugar, el concepto de «culpa» se debe interpretar en sentido técnico jurídico y no en su acepción vulgar de «causa material»;

Debemos señalar que la decisión acerca de que un acto dañoso tenga causa exclusiva en la culpa de la víctima es una cuestión de hecho fuertemente vinculada a la apreciación particular del Tribunal que conozca del caso, y por ello claramente subjetiva. También destacar la aplicación, más restrictiva desde finales de la década de los 60, de esta excepción de responsabilidad por parte del Tribunal Supremo, así como que, pese a haber fijado los requisitos que acaban de ser expuestos, el alto Tribunal ha llegado a apreciar culpa exclusiva de la víctima (como se puede ver a continuación) aun cuando el demandado había incurrido en negligencia, en sentencias en las que establece que la culpa de la víctima es tal, que absorbe por completo una culpa leve del eventual responsable. Por ello deducimos que más correcto hubiera sido decir, en el segundo requisito, que la entidad de la culpa de la víctima podría llegar a excluir la imputación objetiva de la conducta levemente negligente del demandante.

Podemos apreciar esta corriente jurisprudencial en las STS de 10 de noviembre de 1993, en la que se declara culpa exclusiva del arrendatario, como víctima, por no poner en conocimiento del propietario la necesidad de realizar reparaciones en la vivienda; y en la de 12 de febrero de 2003, en la que se aprecia culpa exclusiva de la víctima, esto es, de la mujer de edad avanzada que tropezó y cayó mientras paseaba por el terreno adjunto a un edificio en construcción cubierto de cascotes y grava, por –dice el Tribunal- lo evidente del peligro que suponía deambular por tal terreno.

Más reciente es la STS de 21 de mayo de 2008, que expresa que “se deduce con facilidad la culpa exclusiva de la víctima que fue apreciada por el Juez de instancia, pues, acreditado el cumplimiento de las exigencias reglamentariamente impuestas para la organización y desarrollo del festejo, y probado también que los organizadores del

evento dieron, al comienzo del mismo, las pertinentes explicaciones acerca de en qué consistía éste, así como que avisaron oportunamente de la entrada en el ruedo del toro manso que debía de conducir a las becerras a los corrales, ordenando a los participantes que en él se encontraban que abandonasen la arena, se impone el hecho, igualmente averado, de que el actor, que voluntariamente participó en el espectáculo, permaneció en el ruedo sin atender a los avisos de los responsables del desarrollo del festejo taurino, ignorando la intimación para que los participantes lo desalojaran, ante la inminente presencia del astado manso que había de conducir a las becerras nuevamente a los corrales, y, además, se situó en la trayectoria de éste, lo que provocó que fuera arrollado por él, causándole las lesiones por las que se reclama. El perjudicado, pues, participó voluntariamente en una actividad claramente de riesgo, asumió éste y, por ende, sus consecuencias, e incluso lo incrementó, permaneciendo en el ruedo con inobservancia de las instrucciones de los organizadores, a quienes no puede atribuirseles la creación de un mayor riesgo que el aceptado por aquél, ni tampoco reprochárseles omisión de deber de diligencia alguno causalmente relevante en la producción del resultado lesivo, ante lo que se revela como un comportamiento voluntario del perjudicado que contribuye eficaz y decisivamente a la producción del daño, en la medida en que se ha colocado a sí mismo en posición de sufrir el riesgo”.

De nuevo en el ámbito de los festejos populares es posible hallar ejemplos de jurisprudencia contemporánea que ilustran la aplicación de esta doctrina, como sucede con la STS de 6 de Febrero de 2015, atinente al accidente sufrido por una mujer que durante la madrugada y en el transcurso de unas fiestas patronales subió a un escenario móvil, no instalado para ser ocupado por el público, salvando un desnivel de 1,50 metros y cayendo a continuación desde él. Sostiene el Tribunal Supremo que “existe culpa exclusiva de la víctima en cuanto la demandante accedió al escenario bajo su responsabilidad y con conocimiento de que carecía de vallado, siendo así que en todo caso el accidente no se produjo por la caída, rotura o, en definitiva, defecto de la plataforma instalada, sino al precipitarse desde la misma la demandante que había asumido de ese modo el riesgo inherente a su actuación (...) de manera que desde ese momento, y por el propio riesgo que asumía, debió de adoptar la diligencia necesaria para evitar caer desde la misma, lo que se produjo por una circunstancia ajena a los organizadores e instaladores de la plataforma que sólo a ella resultaba imputable.”

Nos habla esta Sentencia de “la importancia que en orden a la culpabilidad exclusiva de la víctima ha de darse al control de la situación que puede corresponderle en cada caso” y de la “competencia de la víctima” como criterios determinantes al apreciar la imputabilidad del resultado al agente del daño, que en este caso motivaron la exoneración de responsabilidad de la comisión de festejos y de la empresa instaladora, y se la atribuyeron a la propia víctima.

ii. Participación causal de los inimputables

Siguiendo el planteamiento del profesor Reglero Campos¹⁵, el problema en torno a la participación de los inimputables surge cuando éstos son el sujeto pasivo de un daño ocurrido como consecuencia de un hecho en el que han tenido una participación causal decisiva. Tal como ya expresamos, el Tribunal Supremo establece como requisito para apreciar culpa exclusiva de la víctima que el concepto de «culpa» se interprete en sentido técnico jurídico y no en su acepción vulgar de «causa material». Ello presupone que debe haber imputabilidad. Por lo tanto, que el comportamiento que ha causado el daño pueda ser negligente no implica que el daño pueda ser imputable a su autor porque dicho autor ha de ser imputable subjetivamente.

En un sistema subjetivo de responsabilidad esta cuestión no supondría un problema porque no sería posible imputar subjetivamente el daño al inimputable que lo ha causado materialmente, pero en los sistemas objetivos o por riesgo de responsabilidad sí que puede plantear problemas que llevan a realizar una imputación objetiva por partida doble: por una parte al agente del daño, por acaecer éste dentro de una actividad de riesgo iniciada, generada o controlada por él, y por otro lado al inimputable, por iniciar o irrumpir su conducta el curso causal.

Podemos observar esta problemática en la STS de 27 de enero de 2015: “siendo tres los menores implicados, Bernardo, Eugenio y Vidal (cuyos padres tenían conocimiento de que éste era influenciable e hiperactivo, de que no se centraba y de que no podía controlar sus impulsos y hacía cosas de forma irresponsable), los dos primeros, hermanos éstos, imputan dicho hecho a Vidal y éste “lo imputa a uno de aquellos sin poder precisar cuál en concreto; y, no existiendo ningún testigo que viera esta concreta

¹⁵ REGLERO CAMPOS, L. “El nexa causal. Las causas de exoneración de responsabilidad: culpa de la víctima y fuerza mayor. La concurrencia de culpas” en *Lecciones de Responsabilidad Civil*, 2ª Ed. Coordinado por BUSTO LAGO y REGLERO CAMPOS. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona. Pág 128

acción, lo que sí se ha demostrado de manera indudable e irrefutable es que realmente los tres menores participaron, de común acuerdo, en la actividad peligrosa de lanzar piedras a los vehículos que circulaban por la autovía. De ello se deriva la responsabilidad solidaria de los padres demandados, como declara la sentencia de instancia; efecto de solidaridad que ha sido expresamente reconocido por la Sala I del Tribunal Supremo, en un supuesto similar y extrapolable al presente; responsabilidad que se debe imputar de una forma solidaria a cada uno de los miembros del grupo a través de sus representantes, los padres de los menores causantes de los daños, cuando, como aquí sucede, todos contribuyeron causalmente a la producción del daño cuya indemnización se pretende y no es posible deslindar la actuación de cada uno en el evento nocivo. Es razón por la cual, siendo los menores civilmente inimputables, serán sus padres quienes deberán responder solidariamente.”

Así pues, apreciamos aquí un criterio del Supremo por el que se distribuye la responsabilidad de manera solidaria entre los padres de los menores. Ahora bien, debemos reconocer el conflicto para distinguir con claridad cuál ha sido el motivo para sentenciar en este sentido puesto que no se refleja si la motivación procede de la corriente que aboga por la realización de una imputación objetiva doble, hacia el agente imputable y hacia el agente inimputable, o procede más bien de la dificultad para aclarar cuál fue el menor que realizó el lanzamiento de la piedra que motivó el accidente que acabó con la vida del esposo de la demandante.

d. La culpa de la víctima como causa de moderación de la responsabilidad

Se discute sobre la expresión correcta: «compensación de culpas», «conurrencia de culpas» o «conurrencia de causas» (siendo totalmente impropia la de «compensación de causas»). Mediando culpa tanto del demandado como de la víctima, sería más correcta la expresión «conurrencia de culpas» en la medida en que presupone la preexistencia de una imputación objetiva a dos o más personas y, en consecuencia, de una «conurrencia de causas».¹⁶

¹⁶ REGLERO CAMPOS, L. “El nexo causal. Las causas de exoneración de responsabilidad: culpa de la víctima y fuerza mayor. La concurrencia de culpas” en *Lecciones de Responsabilidad Civil*, 2ª Ed. Coordinado por BUSTO LAGO y REGLERO CAMPOS. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona Pág 132

Dejando de lado –solo temporalmente- los regímenes especiales, ha sido el Tribunal Supremo quien ha mantenido plenamente operativa en nuestro Derecho esta moderación de la responsabilidad o de la indemnización del daño a través de su jurisprudencia puesto que nuestro Código Civil no contempla la concurrencia de culpas como mecanismo de distribución de la responsabilidad por daños. Sin embargo sí que se prevé esta moderación de la indemnización o reparación del daño en el artículo 114 del Código Penal, que establece que “si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales podrán moderar el importe de su reparación o indemnización”, norma que ha resultado aplicable no solo ante los órganos jurisdiccionales penales sino también civiles.

Ya en el Código Civil, el artículo que se utiliza para realizar la llamada compensación de culpas, aunque más bien sea una concurrencia causal, es el 1103, que establece: “La responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones pero podrá moderarse por los Tribunales según los casos”. El artículo 1103 no se utiliza para moderar la indemnización en los casos de negligencia y, en cambio, sí se usa para moderar la indemnización cuando hay una compensación de culpas.¹⁷

A este respecto, la STS de 29 de julio de 2003, el caso de un operario que incumplía la normativa de seguridad de su empresa al colocar un poste eléctrico y fue alcanzado por una descarga de la línea de alta tensión situada en ese lugar a una distancia ilegal del suelo por la empresa eléctrica demandada, establece: “(...) en este caso existe correlación o armonía entre las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito y la parte dispositiva de la decisión, toda vez que no incurre en incongruencia la sentencia que, al apreciar la incidencia de culpa o negligencia en la víctima, aunque no con intensidad suficiente para eliminar totalmente la responsabilidad de determinados sujetos pasivos, modera la referida responsabilidad por la concurrencia de culpas, la cual es incluso apreciable por los Juzgador de instancia aunque no la pida el demandado.”

¹⁷ NAVARRO MENDIZÁBAL, I. “La relación de causalidad (II)” en Derecho de Daños. Coordinado por NAVARRO MENDIZÁBAL y VEIGA COPO, A. Civitas-Thomson Reuters. 2013. Pamplona, Pág. 242

De manera similar se pronunció nuestro Alto Tribunal en la STS de 18 de diciembre de 1997, al decir: “Cuando el resultado dañoso procede de dos actividades culposas concurrentes, que no cabe desviar y que no ocasionan ruptura de la causalidad eficiente y necesaria, se produce compensación de responsabilidades en su traducción económica que facilita la aplicación moderadora que autoriza el art. 1103 CC.”

Aparece pues, aquí, la facultad moderadora de la que hablaba de Ángel Yagüez¹⁸ como aplicable a la responsabilidad extracontractual, si bien, con puntualizaciones, visibles por ejemplo en la STS de 15 de diciembre de 1999: “Basta atender a la redacción del artículo 1.103 del Código Civil para comprender que la moderación de la responsabilidad que contempla se configura como una facultad atribuida al Tribunal, y así ha venido siendo entendida por una constante jurisprudencia, -cuyo general conocimiento excusa de su reseña concreta-, en el sentido de considerarla como facultad discrecional, según las circunstancias del caso, sin que constituya un mandato para el Juzgador, hasta el punto de declarar que no es revisable en casación(...)”.

Durante la descripción de la evolución desde el sistema de responsabilidad subjetiva al sistema de responsabilidad objetiva, al comienzo de este trabajo, hablamos de la STS de 23 de enero de 1970, que distinguía tres soluciones en función de la entidad de la culpa de agente y víctima, contemplando primero, la absorción de la culpa de la víctima por la del agente; segundo, la absorción de la culpa del agente por la de la víctima; y tercero, considerar ambas equivalentes y moderar la indemnización. Corresponde, en este punto, conocer ejemplos, sentencias, que nos permitan apreciar claramente cómo se han respetado, pese al transcurso del tiempo, las tres «soluciones» propuestas.

Para la primera, resulta ilustrativa la STS de 19 de mayo de 2005, relativa a la muerte de un hombre que al conducir su vehículo trató de atravesar un paso a nivel siendo arrollado por un tren. El Supremo condenó a RENFE al pago de una indemnización aduciendo que “quién tiene el control de la utilización del ferrocarril, así como de las instalaciones de seguridad correspondientes, debe adoptar y extremar todas las medidas necesarias para evitar los resultados lesivos para quienes precisen usar de algún modo la vía. (...) y, en el caso, no sólo no se tuvieron en cuentas las circunstancias singulares en

¹⁸ DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., “Elementos o presupuestos de la responsabilidad civil (III), en *Tratado de Responsabilidad Civil* Coordinado por SIERRA GIL DE LA CUESTA. Ed Bosch, 2008. Pág 451.

relación la peligrosidad del paso a nivel en concreto, sino que incluso se descuidaron medidas de seguridad elementales”. Además, sobre la absorción de la culpa de la víctima por la del agente, la Sentencia continúa aduciendo que “no cabe aceptar para el caso una conducta culposa de la víctima con la virtualidad o entidad no ya para dar lugar a la apreciación de "culpa exclusiva" -causa única, o jurídicamente valorable como tal-, sino ni siquiera para atribuirle una incidencia en el nexo causal -generación del accidente, o agravación de sus resultados- que pudiera dar lugar a una concurrencia de causas, traducible en una moderación de la indemnización, tanto más si se tiene en cuenta que la concedida en el caso es ponderada, y singularmente adecuada a su naturaleza de deuda de valor”.

En cuanto a la segunda solución la STS de 16 de octubre de 2007, decide acerca de la responsabilidad de un joven con esquizofrenia paranoide que adquirió cianuro en la tienda de la demandada para ingerirlo y acabar con su vida. En ella se pone de manifiesto que “carece de sentido insistir en que se debió informar exhaustivamente del peligro del producto y en que no se advirtió al cliente del mismo, ni de los riesgos, ni de la responsabilidad en que se incurre con el manejo de la sustancia, porque claramente consta como probado que el comprador conocía las características tóxicas del producto y, precisamente, lo adquirió para provocarse la muerte. Igualmente –y es aquí donde apreciamos cómo la culpa de la víctima absorbe la del agente- que el daño causado por el producto no se produjo por su correcto uso, sino por su uso indebido, y por culpa exclusiva del afectado. Sucede que no se ha apreciado la existencia de un comportamiento negligente por parte del dependiente que vendió el producto tóxico, ya que en absoluto incurrió en la omisión de las más elementales cautelas que se le imputa por la parte recurrente.”

Para la compensación de culpas, tercera solución propuesta, observamos la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre, también de 2007, relativa a la responsabilidad civil extracontractual tanto de los demandados –miembros de la comisión fallera, miembros de Protección Civil y operarios de la empresa pirotécnica-, como de la parte demandante, la representación del menor que sufrió la pérdida de una de sus manos al explosionar el artefacto pirotécnico que había cogido tras colarse al recinto de una mascletá detonada momentos antes y «defectuosamente vigilada». En esta Sentencia se expresa que “las medidas de seguridad adoptadas por los demandados

para el supuesto de quedar artificios sin explotar fueron muy deficientes, tal como evidencia el hecho de que los amontonaran en una caja, los dejaran junto a la mascletá y se marcharan al bar más próximo, descuidando sus deberes de vigilancia del recinto, protegido tan solo por dos cintas de tela adhesiva, permeables a la entrada de cualquiera y especialmente de los chiquillos que por allí pululaban”. Respecto de la conducta del menor se dice únicamente que éste, que contaba con 13 años de edad, “era plenamente consciente” del peligro asumido con su actuación, desplegando una conducta negligente. Concluye la Sentencia diciendo que “(...) se advierte, en consecuencia, que a los demandados les es imputable una omisión concreta y específica de medidas de seguridad que debieron adoptar y no adoptaron y que adquirió relevancia respecto del resultado en virtud de un descuido evidente que se añadió a dicha omisión. La relevancia de esta omisión y posterior descuido, a efectos de la imputación objetiva de la responsabilidad, resulta de un grado muy elevado en relación con los posibles accidentes por acceso de menores a los explosivos dadas las circunstancias existentes (concurencia de menores por la zona), lo que comporta que, resultando atractiva la manipulación de los explosivos para los menores, era previsible que su abandono podía originar accidentes.

Por el contrario, al menor accidentado únicamente se le imputa el conocimiento de la peligrosidad de los artificios que cabe presumir dada su edad, por lo cual resulta evidente que la relevancia causal de su conducta resulta notoriamente inferior, dado que a dicha edad cabe suponer aún en el menor de edad, junto con cierta autonomía respecto de los titulares de la patria potestad, un grado considerable de inclinación lúdica y desprecio de los peligros, consecuencia de la cual la distribución al 50% de la responsabilidad comporta un desconocimiento de la relevancia primordial de la conducta de los demandados (...) –por lo que- el juicio acerca de la distribución de responsabilidades debe ser revisado en casación y ser sustituido por una moderación de la responsabilidad, que corresponde a los demandados en una proporción del 10%, que esta Sala estima adecuada a relevancia causal respectiva de los demandados y de la víctima.”

Se ha dado, pues, una rectificación, una compensación que lleva al Supremo a corregir la distribución realizada en la Instancia, y a atribuir la responsabilidad del daño en un 40% a los demandados y en un 60% al menor que sufrió el accidente.

IV. Regímenes especiales

Habiendo tratado de realizar una aproximación clarificadora al régimen general de culpa de la víctima, en el que es argumento plausible la exoneración de responsabilidad del causante del daño por la intervención causal de la víctima del mismo, como también la moderación del quantum indemnizatorio cuando concurren causalmente conductas de ambos en la causación del daño, trataremos a continuación de apreciar detalladamente cómo se produce y cuáles son las consecuencias de esta especialidad a lo largo de los regímenes especiales de la circulación de vehículos a motor, los daños por productos y servicios defectuosos, los causados por animales y los causados por una Administración Pública, en los que “el daño le es imputable al sujeto responsable no solo porque se haya conducido de forma negligente, sino porque es consecuencia de un evento ocurrido en el ámbito de aplicación de una norma especial.”¹⁹

a. Circulación de vehículos a motor

Además de con el Código Civil, en este ámbito contamos con la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobada en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que contiene un anexo titulado “Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”, en el que se recoge el sistema legal de “delimitación cuantitativa de las indemnizaciones exigibles legalmente como consecuencia de la responsabilidad civil en que se incurre con motivo de la circulación de vehículos a motor”.

Se trata de un sistema objetivo de responsabilidad modulado por la existencia de dos causas de exoneración de la responsabilidad que impiden la imputación del daño al agente. Tales causas son la culpa de la víctima y la fuerza mayor extraña a la conducción del vehículo. Respecto a la que nos interesa, contenida en el art 1.1.2 de la LRCSCVM, la culpa de la víctima aparece con un error en su formulación, puesto que se enuncia del siguiente modo: “El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños

¹⁹ MARTÍNEZ MARFIL, J. “El método de condenas cruzadas. Análisis de la Sentencia del TS de 10 de septiembre de 2012” en Revista Digital *elderecho.com*, 1 de Noviembre de 2013.

fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo.” Menciona este artículo «conducta» y «negligencia» del perjudicado, términos que poseen significados situados en planos distintos. Para el Derecho, «conducta» constituye un hecho objetivo (concurrente necesariamente en todos los accidentes de circulación), mientras que «negligencia» es un término valorativo que puede predicarse de toda conducta contraria al deber de cuidado. La única explicación razonable del precepto pasa por entender que lo que exonera de responsabilidad al conductor es la culpa de la víctima y no la mera conducta de ésta.²⁰

i. Culpa de la víctima como causa de exoneración de responsabilidad

Partimos en este caso de lo establecido en la STS de 10 de diciembre de 2009, que establece: “La responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor se asienta sobre el riesgo generado por su conducción, de manera que la culpa de la víctima, aunque resulte probada, si no constituye la causa exclusiva del accidente, carece de eficacia para eximir de responsabilidad al conductor”.

Ahora bien, aparte de la exclusividad, como primera posibilidad derivada de la intervención de la víctima en el ámbito de la circulación de vehículos a motor, la exoneración del agente del daño precisa de otros requisitos, estables, presentes en la jurisprudencia del Supremo. Sin embargo, es en los pronunciamientos de las Audiencias Provinciales²¹ donde aparecen enunciados con mayor claridad los requisitos que se exigen a la culpa de la víctima para suponer la exoneración del agente:

a) que la conducta culpable de la víctima sea la única, total y exclusivamente originadora del daño.

b) que la conducta del conductor del vehículo sea absolutamente irreprochable, señalándose incluso que para que el conductor quede exonerado de responsabilidad, no sólo debe guardar la máxima diligencia y cumplir escrupulosamente las normas reglamentarias, sino que también debe haber efectuado la maniobra más rectamente

²⁰ REGLERO CAMPOS, L. “Responsabilidad Civil y seguro en la circulación de vehículos de motor” en *Lecciones de Responsabilidad Civil*, 2ª Ed. Coordinado por BUSTO LAGO y REGLERO CAMPOS. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona Pág. 259.

²¹ Vid la SAP Alicante de 12 de Junio de 2012, y la SAP Salamanca de 17 de Junio de 2014.

dirigida a evitar o aminorar el daño atendidas las circunstancias concurrentes, o que ésta se hubiera omitido por resultar imposible.

c) imprevisibilidad de la conducta de la víctima, es decir, la conducta de la víctima debe ser absolutamente imprevisible para el conductor.

Es posible ejemplificar la aplicación de estos requisitos, por ejemplo mediante lo expuesto en la STS de 16 de Mayo de 2003, en la que el Tribunal aprecia culpa exclusiva de la víctima debido a que ésta irrumpe súbitamente en la calzada, fuera del paso de peatones, en la STS de 23 de Abril de 2009, relativa a lo recto e irreprochable de la conducta del conductor del vehículo, y en la STS de 20 de Julio de 2011, referida a la exclusividad de la conducta de la víctima como originadora del daño que ella misma sufrió. A través de estas Sentencias así como de las de Audiencias Provinciales queda patente, por un lado, la exigencia que mantienen los Tribunales en cuanto a la necesaria confluencia de las tres formalidades y, por otro lado, como concluye la STS de 27 de enero 2005, que “la jurisprudencia viene decantándose más claramente por una posición que empieza a rechazar la protección a ultranza del peatón que temerariamente cruza la calzada”, tal como hemos tratado de argumentar jurisprudencialmente.

ii. Culpa de la víctima como causa de moderación de la responsabilidad

La segunda posibilidad en cuanto a la intervención de la víctima en el ámbito de la circulación de vehículos a motor es la moderación de la responsabilidad del agente del daño, que se da cuando no se produce la concurrencia que taxativamente se exige para que la exoneración tenga lugar, interviniendo causalmente y en todo caso las conductas del agente y del perjudicado.

En este punto resulta apropiado aclarar, debido a la presencia abundante que se aprecia en numerosos recursos de casación²² que llega a resolver el Supremo, la cuestión de a quién corresponde valorar la participación de los agentes que intervienen en un evento dañoso. La respuesta es que no corresponde al Supremo, a no ser que se trate de

²² Vid, en este sentido la STS de 20 de mayo de 2008, en la cual se recoge un resumen de sentencias sobre esta materia, de 25 de marzo de 2010, de 4 de noviembre de 2010; 11 de noviembre de 2010 y 14 de marzo de 2011, que establece que la apreciación del grado de participación de los distintos agentes en la producción del resultado dañoso a los efectos de determinar las cuotas de responsabilidad por concurrencia de culpas es una materia que en principio corresponde al tribunal de instancia.

supuestos de grave desproporción o defectuosa apreciación del nexo causal, que sí darían lugar a una revisión en casación.

Sentencias de la Sala I del Supremo como por ejemplo las fechadas el 11 de Julio y el 30 de Noviembre de 2011 confirman y amplían esta idea, en tanto que consideran la moderación "una auténtica facultad discrecional del juzgador de instancia", y que, según el Alto Tribunal, "solo sería revisable en casación en supuestos aislados, (...) de tener lugar una aplicación desmedida o fuera de la lógica o el raciocinio de tal regla".

Sin embargo, y sin alejarnos de este planteamiento, es preciso tener en cuenta, desde periodos anteriores la consideración por parte de la jurisprudencia²³ de que la casación no es una tercera instancia, y que no es posible plantear mediante el recurso de casación temas relativos al juicio de hecho, como son los errores en la valoración de la prueba, siendo también inaceptables todas las apreciaciones de la parte recurrente que directa o indirectamente cuestionen o se aparten de las declaraciones de hecho efectuadas en la resolución recurrida.

Uno de los casos en los que podemos ver, por el contrario, que la culpa de la víctima no es suficiente siquiera para moderar la responsabilidad del causante del daño y por tanto la no aplicación del art. 1.1.4. LRCSCVM, es el de la STS de 12 de diciembre de 2008. Durante las fiestas patronales del pueblo y en una de sus calles, el conductor del vehículo atropelló a un peatón que caminaba por el lado izquierdo de la calzada, esto es, por el contrario al sentido correcto de la marcha del vehículo, dándose a continuación a la fuga. A consecuencia del atropello, la víctima estuvo hospitalizada 139 días, tras los que fue dado de alta con lesiones y secuelas consideradas como gran invalidez. Para la Sala I del Supremo, la trayectoria del automóvil era anómala y las circunstancias concurrentes, las fiestas patronales, exigían una circulación prudente puesto que "la negligencia del peatón, consistente en penetrar en la calzada por una parte por la que no era previsible que el vehículo circulase, y en circunstancias que imponían al conductor especiales deberes de precaución, tiene un carácter secundario que impide atribuirle relevancia a los efectos de exonerar al conductor de la imputación del daño producido como ajeno, en todo o en parte, a su responsabilidad objetiva por los riesgos de la

²³ Sirvan de ejemplo a lo expuesto, que la Casación no es una tercera instancia, las SSTS de 9 de Julio de 1947, de 5 de Noviembre de 1997, de 24 de Febrero de 2000 y de 7 de Septiembre de 2014.

circulación. Así, (...) en caso de accidente de circulación con víctimas ajenas a la circulación de vehículos, como es el caso de los peatones, debe rechazarse la interpretación de que la responsabilidad del conductor es paralela a la responsabilidad de la víctima negligente, pues la ausencia o moderación de responsabilidad del primero deriva de la falta de imputación objetiva a pesar del riesgo creado, y no de una responsabilidad subjetiva del conductor paralela a la posible responsabilidad subjetiva de la víctima por los daños causados.”

La propia Sentencia concluye sus Fundamentos Jurídicos estableciendo que “se fija como doctrina jurisprudencial que no es de aplicación la moderación de responsabilidad y reparto de la indemnización por daños a las personas previstos en el artículo 1 LRCSVM, cuando, contribuyendo a la producción del resultado dos conductas, la del conductor del vehículo de motor y la de la víctima ajena a la circulación de estos vehículos, la conducta del conductor por su entidad cuantitativa y cualitativa constituye causa determinante de la colisión, aun cuando exista una contribución causal de la víctima de escasa entidad o desproporcionada en relación con la del conductor del vehículo de motor.” Es decir, es posible y de hecho tiene lugar, al contrario de lo anteriormente expuesto, que aun interviniendo una conducta negligente por parte de la víctima, ésta se considere no determinante por la entidad que alcanza la del agente.

iii. Criterios en las tablas de la LRCSVM

Tal y como recoge la Exposición de Motivos de la Ley, se trata éste de un “sistema legal de delimitación cuantitativa del importe de las indemnizaciones exigibles” que “se impone en todo caso, con independencia de la existencia o inexistencia de seguro y de los límites cuantitativos del aseguramiento obligatorio”, y que “se articula a través de un cuadro de importes fijados en función de los distintos conceptos indemnizables que permiten, atendidas las circunstancias de cada caso concreto y dentro de unos márgenes máximos y mínimos, individualizar la indemnización derivada de los daños sufridos por las personas en un accidente de circulación, constituyendo por tanto una cuantificación legal del «daño causado» a que se refiere el artículo 1.902 del Código Civil, y de la responsabilidad civil a que hace referencia el artículo 116 del Código Penal.

Artículo 116 CP: “Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito o falta los jueces o tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno.”

Partiendo de ese punto, si es preciso reajustar el quantum indemnizatorio se operará del modo que establece el anteriormente citado art. 1.1 LRCSVM, el cual supone que si concurrieran la negligencia del conductor y la del perjudicado, se procederá a la equitativa moderación de la responsabilidad y al reparto en la cuantía de la indemnización, atendida la respectiva entidad de las culpas concurrentes.

Para ejemplificar la manera en que opera este procedimiento, apreciamos la STS de 24 de Abril de 2014, relativa a un peatón atropellado al cruzar con el semáforo en fase roja para peatones y verde para vehículos, por uno que circulaba a 52 kilómetros por hora, la cual establece que “La intervención significativa aunque no exclusiva de la víctima propicia la apreciación de la concurrencia de culpas, con la consiguiente moderación proporcional de las prestaciones indemnizatorias, que se ajusta a los hechos probados que se han apreciado sin signo alguno de arbitrariedad, operando el Tribunal con arreglo a la lógica y lo razonable. Esta Sala ha declarado que la moderación de la responsabilidad del conductor se integra en la apreciación del nexo de causalidad en su aspecto jurídico determinando su alcance. Esta es la razón por la que la negligencia del perjudicado no solamente aparece considerada en las tablas II, IV y V del Anexo LRCSVM como factor de corrección de las indemnizaciones básicas (...), sino también como elemento determinante del alcance de la responsabilidad del conductor por daños a las personas, en el artículo 1 LRCSVM y en el Anexo Primero, apartado 2, en el que se contienen criterios para la determinación de la responsabilidad y la indemnización”.

En cuanto a la aplicación de estos criterios la Sentencia de 2 de marzo de 2006 ha señalado que tales baremos «han sido configurados para un específico sector de la responsabilidad civil» -la circulación de vehículos de motor- y que «el Tribunal Constitucional, en sentencia de 29 de junio de 2000, declaró el carácter vinculante del sistema, pero única y exclusivamente en el ámbito propio de la circulación de vehículos de motor», siendo consecuencia de ello que el baremo, sin ser vinculante, sí pueda ser

uno de los criterios de referencia para los jueces y tribunales de instancia²⁴ en otros ámbitos de la responsabilidad civil.

b. Daños causados por productos y servicios defectuosos

En materia de responsabilidad por productos defectuosos contamos con el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que unificó varias leyes entre las que se encontraban la Ley 22/1994 de Responsabilidad Civil por daños causados por productos defectuosos y la 26/1984 de defensa de consumidores y usuarios, relativa a servicios defectuosos.

Este TRLGDCU viene a establecer de forma imperativa e indubitada la necesidad de responder por los daños que se generen en los consumidores y usuarios, al establecer su artículo 128 que “todo perjudicado tiene derecho a ser indemnizado en los términos establecidos en este Libro por los daños o perjuicios causados por los bienes o servicios”.

La propia Ley nos define en su artículo 136 que, legalmente, «producto» es todo bien mueble, aun cuando esté unido o incorporado a otro mueble o inmueble, así como gas y electricidad. En el artículo siguiente aparece el concepto legal de producto defectuoso, definido como aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias, y, especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación, así como el que no ofrezca la seguridad de los restantes de su serie. Así pues la consideración de producto defectuoso se vincula a una falta de seguridad.

Según el artículo 139, el perjudicado que pretenda obtener la reparación de los daños causados tendrá que probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos.

Para González Poveda²⁵, la responsabilidad que regula esta Ley es de carácter objetivo, se basa en el criterio del riesgo y prescinde de la culpa del fabricante. No obstante, la propia Ley contempla causas de exoneración, que serían aquellas que impiden o

²⁴ En este mismo sentido se pronuncia la STS de Sentencia de 20 de febrero de 2008.

²⁵ GÓNZALEZ POVEDA, P. “La responsabilidad del fabricante frente a terceros” en *Tratado de Responsabilidad Civil*, coordinado por SIERRA GIL DE LA CUESTA, I. Pág 872 y ss.

dificulten el ejercicio del derecho que nace como consecuencia de la responsabilidad prevista en la Ley.

Las causas de exoneración de responsabilidad del productor se contemplan en el artículo 140, y entre ellas no se cita la culpa de la víctima, que se formula en el artículo 145 como «culpa del perjudicado»: “La responsabilidad prevista en este capítulo podrá reducirse o suprimirse en función de las circunstancias del caso, si el daño causado fuera debido conjuntamente a un defecto del producto y a culpa del perjudicado o de una persona de la que éste deba responder civilmente.”

Vemos como en un mismo precepto se contempla la participación de la víctima, del dañado, como causa de exoneración del fabricante al decir el texto «suprimirse», y, por otro lado, una concurrencia de culpas, en la que el daño es concausa del producto defectuoso y además de la culpa de la víctima, que lleva a «reducirse», esto es, a disminuir o moderar, la responsabilidad del fabricante.

La STS de 15 de Diciembre de 2005 contempla un caso clarificador al respecto de la exoneración del fabricante por culpa exclusiva de la víctima, al aclarar la controversia producida sobre un producto considerado defectuoso por el demandante.

Se ocupa del recurso de casación interpuesto por el comprador de un vehículo para competir en un rally que resultó herido de gravedad al estrellarse contra un talud durante una de las carreras. El demandante consideraba que el accidente traía causa en la rotura de una de las piezas mecánicas, la cremallera de la barra de dirección, que los fabricantes recomiendan sustituir cada cuatro pruebas. Al igual que en primera instancia y en apelación, las pretensiones del demandante se desestiman porque, dice la Sentencia, “no se ha probado la existencia de un defecto de fabricación, y la advertencia sobre el control de la pieza, -como dice el juzgador de instancia en sintonía con el informe pericial- no implica necesariamente la existencia de dicho defecto. Si centramos el juicio jurisdiccional en el tema de la fatiga del material como causa que haya incidido o incluso determinado la rotura de la dirección, aun en tal perspectiva no cabe apreciar nexo causal, ni siquiera si pudiera estimarse con certeza que el accidente derivó de la rotura de la barra de la dirección, pues ésta bien pudo producirse al chocar el vehículo contra al talud. (...) La circular 2/95, de fecha 13 de febrero de 1.995, de Peugeot Talbot España -fabricantes- establecía imperativamente la sustitución de la cremallera de referencia cada cuatro rallyes, algo plenamente conocido por el dueño y piloto del

vehículo (hecho probado), y sucede que compuesto el "Desafío Peugeot" en que participó el Sr. Jesús María (demandante, y aquí recurrente), de ocho pruebas, el accidente ocurrió en la octava, y aunque consta que efectuó las revisiones reglamentarias, sin embargo no se reemplazó la cremallera como era imperativo. Con esta conducta omisiva se generó la causa eficiente del resultado, y con ello la culpa exclusiva de la víctima que rompe cualquier nexo causal respecto de las responsabilidades accionadas. El buen sentido exigía el cambio de la cremallera de dirección después del cuarto rallye, y conduce a entender que tal omisión es la causa determinante de la rotura de la dirección, y ello con independencia, incluso, si ésta fue o no, como ya se ha dicho, el desencadenante del evento”.

Por tratar una sentencia relativa a la electricidad, como producto así considerado legalmente, observamos la exoneración de la compañía eléctrica por culpa exclusiva de la víctima en la STS de 24 de Septiembre de 2002. Tras ver desestimadas sus pretensiones en las instancias precedentes, los demandantes interpusieron recurso de casación al Supremo, que vieron igualmente desestimado. Reclamaban una indemnización por la muerte de una mujer fallecida por una descarga eléctrica, motivada, para ellos, en lo ineficaz e inapropiado de los mecanismos de control de potencia instalados por la compañía suministradora del servicio. Pero el Supremo, al igual que los juzgadores precedentes, aprecia culpa exclusiva de la víctima, por cuanto “es de tener en cuenta que en la sentencia recurrida se califica la manipulación de un cable de conexión eléctrica realizada por la causante de los actores como ajena a las más elementales normas de cuidado y protección, consecuencia de la cual fue la descarga eléctrica que provocó la muerte; y que ante dicha acción los mecanismos de protección instalados resultaron totalmente inoperantes, sin posibilidad de que otros mecanismos adicionales hubieran podido propiciar un resultado distinto. En conclusión, ha habido una actuación incorrecta del usuario y, sin duda alguna, tal actuación ha sido la causa del siniestro, por lo que ha de afirmarse que concurre la culpa exclusiva de la víctima, que impide el nacimiento del derecho a indemnización”.

Al respecto de la otra opción que posibilita el artículo 145 TRLDCU, la «reducción» de la responsabilidad si el daño causado fuera debido conjuntamente a defecto y a culpa del perjudicado, observamos la doctrina jurisprudencial de la STS de 17 de Julio de 2008, relativa a la demanda de una indemnización por las lesiones y secuelas sufridas por el

actor, por culpa o negligencia de la clínica en la que se encontraba, al sufrir una caída producida por la rotura de un elemento de la cama.

Dice la Sentencia que “cuando en la producción del daño concurren varias causas, debe acompañarse la cuantía de la responsabilidad al grado y naturaleza de la culpabilidad de manera que, si no se produce culpa exclusiva de la víctima y es compartida por el agente, debe distribuirse proporcionalmente el "quantum" para lo cual ha de atenderse al factum establecido como probado y que éste ponga de manifiesto la desproporción de responsabilidades que se postula. La aplicación de esta doctrina al presente caso determina el rechazo del recurso pues, no puede el recurrente negar que padecía un proceso de cervicoartrosis moderada, y que, junto a tal patología, la Audiencia, ratificando lo expuesto por el Juzgador de instancia a este respecto en atención a los datos obrantes en el historial médico del paciente, se hace eco del proceso degenerativo de la enfermedad que padecía el recurrente, elevando los meritados padecimientos físicos previos al accidente a la categoría de concausa antecedente del resultado dañoso, de manera que, siendo sin duda la caída la causa eficiente, que completa la acción de la causa última, fue el proceso degenerativo, exponente del cual era la propia intervención quirúrgica, lo que hizo que el daño fuera mucho mayor del que de ordinario cabe esperar, justificándose de esta forma plenamente la modulación de la culpa, y la reducción de la cuantía indemnizatoria.”

c. Responsabilidad Civil por daños causados por animales

La responsabilidad civil por hecho propio del artículo 1902 Cc, presidida por la culpa, se diferencia de la responsabilidad civil por animales y cosas inanimadas que se encuentra recogida en los artículos 1905 a 1910 Cc puesto que en éstos existe una mayor objetivación: el rasgo común de estos preceptos reside en que el daño viene causado por un animal o una cosa, en una conducta independiente a la voluntad del hombre, consecuencia de una actitud independizada o desprendida de su actitud.

El régimen especial en materia de daños causados por animales viene constituido por el artículo 1905 Cc, que establece: “El poseedor de un animal, o quien se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Solo cesará la

responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido”.

En algunos casos podría haber presunción de culpa y en otros responsabilidad claramente objetiva, de forma que se responderá por la mera causación del daño. Sin embargo, pese a encerrar una presunción de culpa, se ha entendido, en no pocas ocasiones, de una forma objetiva, de manera que el responsable se exoneraría demostrando la ruptura del nexo causal. Atribuir la responsabilidad al poseedor o al que se sirve del animal nos aleja de disquisiciones teóricas sobre la titularidad y nos conduce a cuestiones mucho más prácticas como el gobierno y la vigilancia real sobre el animal. La responsabilidad incluye los daños que cause el animal aunque se escape o extravíe, y aquella corresponderá al poseedor o a quien se sirva del animal. El propio precepto, 1905 Cc, contempla los casos en los que cesa la citada responsabilidad, y lo hacen por constituir la ruptura del nexo causal que motiva que el poseedor del animal deje de responder por los daños, que si bien han acaecido, no serán de su responsabilidad. Así pues, las causas de exoneración son las mismas que analizamos en el ámbito de la responsabilidad civil por daños en la circulación de vehículos a motor.²⁶

Con el objetivo de comprender la trascendencia de la posesión del animal como criterio que responsabiliza a quien lo posee, acudimos a la STS de 8 de Octubre de 1998, en la que una demandante, tras haber sido desestimadas sus pretensiones en Juzgado de primera instancia y en Audiencia, recurre al Supremo. La demandante solicitaba una indemnización por los daños sufridos tras caer de un caballo alquilado por el demandado, y lo hacía por considerar, al contrario que las instancias anteriores, que en caso de alquiler de caballos, quien se sirve de los mismos no es el jinete que alquila sino el propietario del caballo, que además de recibir un beneficio económico, no deja en momento alguno de ser poseedor, lo que determina que deba responder objetivamente. Pero el Supremo rechaza los motivos que alega la recurrente puesto que considera que “estamos pura y simplemente ante un alquiler de un caballo para la práctica de la equitación, y no ante un supuesto de daño ocasionado a un tercero por un animal sin que medie relación jurídica alguna entre aquél y el propietario o quien se sirve del mismo.

²⁶ NAVARRO MENDIZÁBAL, I. “La Responsabilidad Civil de animales y cosas inanimadas” en *Derecho de Daños*. Coordinado por NAVARRO MENDIZÁBAL y VEIGA COPO, A. Civitas-Thomson Reuters. 2013. Pamplona. Pág 370 y ss.

No se sirve de él, en el sentido del art. 1905, quien lo arrienda sino que lo hace objeto de un negocio jurídico. La responsabilidad por riesgo que establece el art. 1905 –fundamentación del motivo de la demanda- no beneficia al jinete que lo alquila, pues el animal deja de estar bajo la custodia o cuidado del arrendador, quedando sometido entonces a su posesión real y efectiva, es, en suma, el poseedor que se sirve de él”.

De esta forma el Alto Tribunal considera poseedora a la mujer que alquiló el caballo y la responsabiliza de los daños que causó, esto es, de la caída que ella misma sufrió, exonerando al propietario y cuidador de los caballos.

Otro supuesto de exoneración del poseedor de los animales por culpa exclusiva de la víctima es el caso que trata la STS de 15 de Noviembre de 2001. En el transcurso de un encierro a caballo, una de las reses se escapó durante horas del recorrido establecido, yendo a parar a una alameda a la que el demandante y recurrente en casación acudió. Dice la Sentencia que “no se ofrece duda de que las lesiones padecidas por el recurrente encuentran su causa directa y eficiente en su actitud de acudir con su vehículo al lugar en que se encontraba el animal peligroso para verle, bajarse del coche y situarse en una proximidad, en la que en un descuido la res le cornea”.

Alegaba el recurrente, en contra del contenido de la sentencia de instancia, que la cogida del toro no se debió a su culpa exclusiva, sino a la de los demandados: empresarios y Ayuntamiento por no impedir que la gente se aproximara al animal. Sin embargo la Sentencia concluye que “no se puede buscar la causa en sucesos remotos y hacer responsables a ganaderos por criar tales animales, hay que atender a la causa próxima, a la conducta del demandante que, sin razón, ni necesidad alguna, acude al lugar donde se encuentra el toro escapado, muy lejano con él, al punto que tiene que utilizar su vehículo e incluso acceder a una zona de árboles o alameda en que su furgoneta no tiene acceso, se acerca para verlo y se descuida. (...) Parte la sentencia recurrida de que el empresario codemandado empleó la diligencia debida para controlar el animal, pero lo que ya escapa a todo control de la diligencia del empresario es que la gente (entre ellos el actor) acuda en vehículos a la zona y allí persiga al toro. El motivo alegado llega a que si alguna persona se acercó es culpa del empresario, y parece porque hace supuesto de la cuestión y parte del dato de que si estaba escapado el animal es por la omisión de las medidas adecuadas por las personas encargadas, empresario y Ayuntamiento pero los encargados del empresario de cuidar los toros no pueden impedir al genérico público

el acudir al lugar donde la res se encuentra, tras haberse escapado y recorrer unos kilómetros.”

Finaliza, ilustrativamente, el Supremo manifestando que “no puede haber concurrencia de culpas, si ésta sólo radica en una parte”.

d. Responsabilidad de las Administraciones Públicas.

Además de en los daños producidos por un particular, la culpa de la víctima aparece también en los supuestos en que los daños provienen de entes de naturaleza pública, esto es, de una Administración Pública. Como argumenta Navarro Mendizábal ²⁷, la de la Administración es una forma de Responsabilidad Civil cualificada por el sujeto pasivo, pero en la que todos sus elementos son los clásicos de esta responsabilidad, que está incardinada conceptualmente dentro de la materia de la Responsabilidad Civil.

La base de esta responsabilidad se encuentra en la Constitución Española de 1978 en el artículo 9.3, que contempla, entre otros aspectos, la responsabilidad de los poderes públicos, y en el artículo 106.2 CE, donde aparece la primera limitación a esa responsabilidad, al exponer el derecho a indemnización de los particulares por las lesiones en bienes o derechos que sufran como consecuencia del funcionamiento de servicios públicos salvo en casos de fuerza mayor.

En periodos anteriores este régimen de responsabilidad aparecía en el artículo 1903 Cc, en su párrafo 5º, pero desde 1992 existe una ley especial que lo regula, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que contiene un título (arts 139 a 146) dedicado a la responsabilidad patrimonial de la Administración.

El art 139.1 LRJPAC reproduce prácticamente el art 106.2 CE, y con ello una primera causa de exoneración, la fuerza mayor. La segunda aparece en el art 139.3 y en el art 141 al referirse a aquellos daños sobre los que por ley se haya establecido un deber jurídico de soportar por el particular, que serán daños no indemnizables.

²⁷ NAVARRO MENDIZÁBAL, I “La Responsabilidad Civil por hecho ajeno (III) AAPP, en *Derecho de Daños*. Coordinado por NAVARRO MENDIZÁBAL y VEIGA COPO, A. Civitas-Thomson Reuters. 2013. Pamplona. Pág. 349

Para Busto Lago²⁸, el problema que se puede plantear en estos supuestos deriva del hecho de que puede resultar difícil determinar si los daños que se pretenden indemnizar por la Administración son atribuibles exclusivamente a la conducta del perjudicado o si, por el contrario, también lo son a la actuación de la Administración prestadora de la actividad en el seno de la cual han tenido lugar. En la práctica esta cuestión habrá de resolverse a través de la oportuna prueba pericial, de manera que si a través de ésta se acredita que los daños son debidos a ambos factores, existirá lo que en el lenguaje propio de la responsabilidad subjetiva se conoce como compensación de culpas y cuando estamos en sistemas de responsabilidad civil objetiva, podemos traducir en compensación de la culpa de la víctima con la imputación del agente del daño que conlleva, como consecuencia práctica más relevante, la reducción proporcional de la indemnización que haya de satisfacer la administración responsable del daño. La concurrencia de la culpa del perjudicado habrá de ser acreditada por la administración que la invoca.

Interpretamos de lo expuesto que es posible que el perjudicado despliegue una conducta dañina, en menor o mayor grado concurrente con la de una Administración, y si esta llega a probarse en juicio, se modere la indemnización que proceda. A continuación y a través de tres sentencias, una que establece la moderación de la indemnización pretendida inicialmente y dos casos de completa exoneración de responsabilidad de la Administración Pública demandada.

En cuanto a la primera de las posibilidades, establece la STS de 15 de octubre de 1982, que “para que se produzca la responsabilidad patrimonial del Estado es preciso que exista una lesión que se haya producido como consecuencia exclusiva del funcionamiento de un servicio público. El requisito de la exclusividad es esencial para apreciar el nexo, la conexión causal con el funcionamiento de la actividad administrativa.”

El caso se refería a la indemnización solicitada por el padre de la víctima del accidente de circulación en que ésta perdió la vida, que no se concede íntegramente respecto a la petición. La víctima conducía de noche su vehículo y mientras atravesaba un paso elevado sobre la autopista, se salió de la calzada, subió por encima de la acera, rompió

²⁸ BUSTO LAGO, J.M. “La responsabilidad civil de las Administraciones Públicas” en *Lecciones de Responsabilidad Civil*, 2ª ed. Coordinado por BUSTO LAGO y REGLERO CAMPOS, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2013. Pág 644 y ss

cuatro metros de barandilla metálica protectora y se precipitó a la calzada de la M-30, probablemente por un despiste y por el estado húmedo de la carretera durante la madrugada, tal como se deduce de la Sentencia. El padre de la víctima alegaba como causa de la muerte que en el momento del accidente no estuviese colocada la barrera de protección o bionda que estaba proyectada como obra complementaria. Sin embargo la Sentencia estima que “no es jurídicamente viable la indemnización que se reclama” porque “el nexo causal entre el servicio público de la carretera y la muerte sobrevenida por el accidente no tiene relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención extraña alguna que pudiera influir en el nexo causal que se da cuando entre el hecho y su resultado media una causalidad próxima y razonablemente previsible que pueda influir en el resultado dañoso. (...) En el presente caso, no se puede afirmar, en modo alguno, que éste se haya producido como consecuencia exclusiva de estar aún sin colocar la doble barrera o bionda protectora, por lo que, aunque el daño ha existido, no se da el requisito de la conexión causal”.

Para la segunda posibilidad, la STS de 9 de Marzo de 1999, relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada en concepto de indemnización por daños y perjuicios por anormal funcionamiento del servicio público de realización de obras, conservación y mantenimiento de la red viaria municipal. La empresa de transportes demandante lo hacía por la pérdida motivada en el vuelco de uno de sus camiones grúa. Para la Sentencia advierte que “no se ha acreditado que la conducta de la Administración haya operado como factor verdaderamente indispensable, idóneo o relevante por su importancia y carácter determinante, en atención a las circunstancias concurrentes, ni siquiera con el carácter de concausa, del vuelco de la grúa, atendido que en ella se afirma de modo concluyente que el vehículo se subió a la acera, por donde no debía circular, sin que conste que estuviera autorizado o que se viera forzado a ello, como la parte recurrente reconoce igualmente en su escrito de interposición del recurso de casación. Cabe concluir, pues, que el deterioro o hundimiento de la acera determinante del vuelco tiene su origen sólo en la actuación del conductor del vehículo, que aparece como causa idónea y relevante de los consiguientes perjuicios, mientras que éstos no pueden imputarse al estado de la calzada ni, en consecuencia, al defectuoso funcionamiento del servicio público municipal.

El segundo ejemplo de exoneración lo encontramos en la STS de 7 de Octubre de 2011, que rechaza el recurso de casación interpuesto por la desestimación de las pretensiones indemnizatorias del actor en las instancias precedentes, en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas como consecuencia de un accidente al zambullirse al mar desde un embarcadero.

Reconoce la Sentencia que “la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido” y que, “como recalca la Sentencia de 19 de junio de 2007, es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público”.

Esta sentencia, que desestima la casación, viene a confirmar la de instancia, la cual considera que “ninguna duda existe acerca de que ha sido la conducta de la víctima la determinante del daño” en tanto que “resulta por lo expuesto constatado que es la conducta consciente y voluntaria del propio perjudicado, al lanzarse al agua desde dicho lugar, un embarcadero que es notorio que no puede ser utilizado como trampolín y zona de baño por el riesgo que ello conlleva, máxime teniendo en cuenta las características rocosas del fondo, la que le lleva a utilizar dicha instalación en forma no idónea a dicha finalidad, asumiendo así un riesgo evidente. De ello deriva la existencia de culpa exclusiva de la víctima que rompe el nexo causal entre el resultado dañoso y el hecho imputable a la Administración, sin que pueda apreciarse la existencia de culpas concurrentes como postula la parte actora. En este sentido la STS de 9 de mayo 2000 declara que la Administración queda exonerada, a pesar de que su responsabilidad patrimonial sea objetiva, cuando es la conducta del perjudicado la única determinante del daño producido aunque haya sido incorrecto el funcionamiento del servicio público”.

V. Conclusiones.

- I. Es sabido que la responsabilidad civil, a través de las tutelas resarcitoria e inhibitoria, busca la reparación justa, proporcionada y acotada del daño causado, para devolver a quien ha visto menoscabados sus bienes o derechos a la situación precedente, y a su vez para alcanzar una prevención que logre evitar nuevos daños.
- II. Sin embargo, el sinfín de circunstancias a las que las personas nos hemos visto y nos vemos expuestas en ámbitos frecuentemente problemáticos y nebulosos, como la circulación de vehículos a motor, o cuantiosos, como los daños por productos defectuosos, han motivado posturas que generalmente convergían en la obligación de resarcir a la víctima.
- III. Los regímenes especiales y especialmente el que establece el art 1905 Cc representan una responsabilidad no culpabilística, precursora de la responsabilidad objetiva o por riesgo que tuvo su auge en periodos posteriores, al reconocer el legislador que hay culpa pero no al mismo nivel que en el art. 1902 Cc.
- IV. Aunque jurisprudencialmente nos localizamos en un ámbito no seguro, en el que la decisión acerca de quién es responsable en muchas de las ocasiones depende de la consideración del tribunal que conozca del caso y pese a periodos en que el régimen de responsabilidad obedecía a corrientes de tipo subjetivo u objetivo en mayor o menor grado, la culpa de la víctima, exclusiva o concurrente, ha estado presente de manera transversal a nivel normativo y, como se ha pretendido ejemplificar, a nivel jurisprudencial a lo largo de la trayectoria de nuestro Tribunal Supremo.
- V. Pese a que pudiera resultar usual la creencia de que en el régimen extracontractual hay que responder siempre por el daño causado, las limitaciones de responsabilidad que produce la intervención de la víctima en el hecho que le daña, motivan un refuerzo de las precauciones a tener en cuenta en prácticamente la totalidad de los ámbitos en los que desarrollamos nuestras actividades, tanto en el lado activo como en el lado pasivo de la relación jurídica que nace cuando se produce un daño.
- VI. Sirva el presente trabajo como incentivo que contribuya a puntualizar el hecho, empírico, de que la obligación de no causar daño a los demás englobaría la de no pretender que alguien que no tiene el deber jurídico de hacerlo, responda relativa o íntegramente del perjuicio que ha causado la propia víctima del daño.

VI. Bibliografía

- ACEVEDO PRADA, R. D. “Una mirada a la responsabilidad civil española: el régimen subjetivo” *Revista Guillermo de Ockham* 11, 2013. pág 79-88.
- BUSTO LAGO, J.M. “La responsabilidad civil de las Administraciones Públicas” en *Lecciones de Responsabilidad Civil*, 2ª ed. Coordinado por BUSTO LAGO y REGLERO CAMPOS, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2013. Pág 644 y ss
- CAVANILLAS MÚGICA, S. “Comentario a la STS de 20 de enero de 1992”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil*, núm. 28. Marzo de 1992. Pág 229
- DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., “Elementos o presupuestos de la responsabilidad civil (III), en *Tratado de Responsabilidad Civil* Coordinado por SIERRA GIL DE LA CUESTA. Ed Bosch, 2008
- GÓNZALEZ POVEDA, P. “La responsabilidad del fabricante frente a terceros” en *Tratado de Responsabilidad Civil*, coordinado por Ignacio Sierra Gil de la Cuesta. Editorial Bosch. 2008
- MARTÍNEZ MARFIL, J. “El método de condenas cruzadas. Análisis de la Sentencia del TS de 10 de septiembre de 2012” en *Revista Digital elderecho.com*, 1 de Noviembre de 2013.
- MARTÍN SALAMANCA, S. *Aplicación de los PETL al Ordenamiento Jurídico Español*. Presentación del Grupo de Investigación para la Proyección de los Principios de la Responsabilidad Civil en el Derecho de Daños de la Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por del Olmo García.
Enlace URL a fecha 19 de abril de 2015:
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_dcho_privado/area_dcho_civil/investigacion/grupos_investigacion/aplicacion_petl

- REGLERO CAMPOS, F. “Culpa y riesgo en los modernos sistemas de responsabilidad” en *Congreso Internacional de Responsabilidad Civil de la Universidad EAFIT*. Memorias en CD. Medellín, Colombia 2005.
- LEÓN GONZÁLEZ, J.M. “Significado y función de la culpa en el actual Derecho de Daños” en *La responsabilidad civil. De Roma al Derecho Moderno*, coordinado por MURILLO VILLAR. Burgos 2001.
- MEDINA ALCOZ, M. *La culpa de la víctima en la producción del daño extracontractual*. Dykinson, Madrid, 2003.
- NAVARRO MENDIZÁBAL, I. “La relación de causalidad (II)” en Derecho de Daños. Coordinado por NAVARRO MENDIZÁBAL y VEIGA COPO, A. Civitas-Thomson Reuters. 2013. Pamplona,
- NAVARRO MENDIZÁBAL, I. “La Responsabilidad Civil de animales y corsas inanimadas” en Derecho de Daños. Coordinado por NAVARRO MENDIZÁBAL y VEIGA COPO, A. Civitas-Thomson Reuters. 2013. Pamplona.
- NAVARRO MENDIZÁBAL, I “La Responsabilidad Civil por hecho ajeno (III) AAPP, en Derecho de Daños. Coordinado por NAVARRO MENDIZÁBAL y VEIGA COPO, A. Civitas-Thomson Reuters. 2013. Pamplona.
- REGLERO CAMPOS “El nexos causal. Las causas de exoneración de responsabilidad: culpa de la víctima y fuerza mayor. La concurrencia de culpas” en *Lecciones de Responsabilidad Civil. 2ª ed.* Coordinado por BUSTO LAGO Y REGLERO CAMPOS. Thomson Reuters Aranzadi. Pamplona 2013.
- ROCA TRÍAS, E. *Derecho de Daños. Textos y materiales*. Tirant lo Blanch, 6ª edición, Valencia 2011

VII. Anexo de jurisprudencia: Sentencias de la Sala I del Tribunal Supremo

STS de 9 de Julio de 1947	STS de 15 de Diciembre de 2005
STS de 23 de Enero de 1970	STS de 2 de Marzo de 2006
STS de 15 de Octubre de 1982	STS de 16 de Octubre de 2007
STS de 16 de Diciembre de 1988	STS de 20 de Diciembre de 2007
STS de 10 de Noviembre de 1993	STS de 20 de Mayo de 2008
STS de 5 de Noviembre de 1997	STS de 21 de Mayo de 2008
STS de 18 de Diciembre de 1997	STS de 17 de Julio de 2008
STS de 8 de Octubre de 1998	STS de 24 de Noviembre de 2008
STS de 9 de Marzo de 1999	STS de 12 de Diciembre de 2008
STS de 15 de Diciembre de 1999	STS de 23 de Abril de 2009
STS de 24 de Febrero de 2000	STS de 10 de Diciembre de 2009
STS de 2 de Marzo de 2000	STS de 8 de Junio de 2011
STS de 15 de Noviembre de 2001	STS de 11 de Julio de 2011
STS de 24 de Septiembre de 2002	STS de 20 de Julio de 2011
STS de 24 de Enero de 2003	STS de 7 de Octubre de 2011
STS de 12 de Febrero de 2003	STS de 30 de Noviembre de 2011
STS de 16 de Mayo de 2003	STS de 24 de Abril de 2014
STS de 29 de Julio de 2003	STS de 7 de Septiembre de 2014
STS de 27 de Enero 2005	STS de 27 de Enero de 2015
STS de 19 de Mayo de 2005	STS de 6 de Febrero de 2015